



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

100131/2012

**PROMET SRL c/ MIN. TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL
s/IMPUGNACION DE DEUDA**

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I. Contra la Resolución ministerial D.R.F. registrada bajo el nro. 34.056, que desestimó la impugnación efectuada en oposición a las Actas de infracción en los términos de la ley 11.683 art. agregado sin número a continuación del art. 40 por incumplimiento a la debida registración, la accionante dedujo recurso de apelación.

Que fs. 278 obra nota que da cuenta de la observancia de los requisitos formales que tornan procedente la apertura de esta instancia.

Los presentes tiene su origen en el cruce de los datos consignados el acta de relevamiento y planilla anexa obrante a fs. 1/6 y la verificación de altas y baja realizadas por el organismo de las que surgiría personal sin la debida registración.

Ante el traslado conferido al empleador, en su escrito de descargo, hace constar que algunas de las personas relevadas actúan en calidad de profesionales independientes vinculados a la firma a través de los contratos de locación de servicios que acompaña. Los restantes trabajadores relevados fueron debidamente registrados.

Al momento de evaluar la defensa opuesta, el organismo invoca la presunción consagrada en el art. 23 de la ley 20.744, destacando que en el acto inspectivo las personas se encontraban desarrollando tareas e informaron fecha de ingreso, días y horas de trabajo. Por otra parte, no admite la reducción de la penalidad en los términos del art. 19 de la Res. 1779/04 por cuanto si bien ciertos trabajadores fueron dados de alta con anterioridad al descargo, la reducción opera únicamente cuando el empleador regulariza su situación respecto de la totalidad de los trabajadores afectados.

Que al respecto ha de señalarse, en primer lugar, que la presunción del art. 23 de la L.C.T. no es operativa cuando quien alega la condición de trabajador lo hace respecto de un profesional universitario, ya que en la hipótesis no se dan las razones que permitan erigir el contrato de trabajo como modelo normal de contratación, desde que tales profesionales pueden comprometer sus servicios tanto a través de contratos de trabajo, como locación de obra, como de mandato, y ello determina la inexistencia de un modelo al que remitirse en los casos ambiguos (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. del 26.07.91, "Zareg, Alcira c/ S.B.A.").

En tales condiciones, cuando de profesiones liberales se trata, la determinación de la existencia de relación de dependencia dependerá de las alternativas probatorias disponibles, no resultando acertado partir de premisas fijas, sino del análisis de la particular situación en cada caso.

En este sentido, no ha de perderse de vista que el actuar de la administración no puede subsumirse en una mera revisión contable, pues ello importaría una inversión en la carga de la prueba (cfr. Wassner, Roberto, "Trámites, procedimientos, recursos administrativos y judiciales en previsión social, pág. 104 y ss.). La presunción "juris tantum" de la existencia de la relación laboral en sentido estricto, como tal, debe verificarse al extremo, pues ello fundará una decisión administrativa de neto corte punitivo. En ese actuar debe imperar el principio de verdad material o real, llevando a cabo las medidas que se consideren conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.05.97, "Cooperativa de Provisión para Puesteros La Armonía").

Del las constancias obrantes en autos, surge que el organismo no verificó si existía un poder disciplinario de la empresa y tampoco cómo era el desenvolvimiento efectivo de los profesionales o la existencia de servicios presentados en otro ámbito. Antes bien, existen facturas de pago por importes variables con la liquidaciones de cada uno de profesionales involucrados que no han sido objetadas por la administración, intrínseca ni extrínsecamente.

En atención a los fundamentos expuestos, el Tribunal **:RESUELVE** 1) Declarar formalmente admisible el recurso deducido, hacer lugar al mismo y revocar la resolución cuestionada; 2) Ordenar la devolución de las sumas depositada en cumplimiento del requisito de pago previo con mas el interés que surja de aplicar la tasa pasiva para uso de la justicia; y 3) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).



Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 RJN).

